

Quiebra GEO; pega a Banorte

Sobreviviente de un concurso mercantil abierto en abril de 2014, que le obligó a reestructurar una deuda calculada en 2 mil 500 millones de dólares, Casas Geo entró finalmente en un proceso de quiebra. De hecho, su acción ya no cotiza en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. La posibilidad de salvar la empresa fundada en 1973 la había asumido una sociedad entre Banorte, Capital Inmobiliario y Pronacap, participando en estos últimos Juan Carlos Braniff Hierro y Fernando Chico Pardo.

El banco encabezado por Carlos Hank González le había inyectado 3 mil millones de pesos, colocando a su vez 500 millones más las otras instancias. Se diría que Banorte pretendía ubicar de lo perdido lo que aparezca, en un marco en que fue la intermediaria más golpeada de cara a la debacle de las promotoras de vivienda al colocarse en escena nuevas reglas para la construcción de unidades media y social.

Como usted sabe, al prohibirse la construcción de núcleos fuera de los centros urbanos, es decir, sin transporte ni servicios, se quedaron colgadas las firmas con una enorme cantidad de reservas territoriales adquiridas con créditos bancarios. Banorte había arriesgado 14 mil millones. En el caso de Geo, los principales acreedores, además de éste, eran CitiBanamex y Santander.

Emplazada la firma a un concurso mercantil, la salida obligó a recomponer radicalmente el capital, quedando los tres bancos con mayoría accionaria. El presidente de la firma, Luis Orvañanos Lascurain, quien mantenía un porcentaje de 13.8%, se quedó sólo con 1.5%. Integrada la empresa al rescate, se nombró como director general al propio Juan Carlos Braniff, cuya carrera la había iniciado como directivo de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), quien duraría sólo unos meses en el cargo, sustituyéndole Juan Carlos Díaz Arellano.

La operación, sin embargo, se resguardaba desde la Dirección General de Crédito y Riesgos de Banorte, encabezada por Guillermo Chávez Eckstein, quien por problemas de salud dejaba la administración en manos de Graciela Serralvo. Al encendido de los focos rojos, fue sustituido éste por Carlos de la Isla, un ejecutivo de la mayor confianza del presidente de la intermediaria y del director general, Marcos Ramírez.

El problema es que en el ramillete de problemas que arrastraba Casas Geo estaban decenas de demandas de usuarios de vivienda de interés social por defectos congénitos en la construcción. De hecho, la firma enfrentó el riesgo de una demanda colectiva promovida por la Procuraduría Federal del Consumidor. En 2007, Casas Geo había sido ubicada como la novena compañía de su ramo más rentable de América Latina en una muestra. Los tiempos cambian

Cumbre de negocios. Prevista para iniciar el 21 del mes que corre, la Cumbre de Negocios en su decimosexta edición, regresa a Guadalajara. El lema esta vez será “México ante un mundo disruptivo”. Al evento, organizado por Miguel Alemán Velasco, acuden 800 capitanes de empresas, participando como oradores personajes como Gerhard Schröder, ex canciller de Alemania, y Alvaro Uribe, ex presidente de Colombia. Los temas en la mesa serán el surgimiento del proteccionismo frente a las economías globales, el racismo con tintes xenófobos, la migración hacia Europa y los Estados Unidos, las victorias electorales generadoras de división y encono social y las propuestas y programas del nuevo gobierno de México.

COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Octubre 16 del 2018

La consulta, métodos de mitin para un tema técnico

El gobierno entrante está en esa transición de dejar los métodos opositores de la manifestación en la plaza pública y la obligación de aprender a tomar decisiones como cabeza de un gobierno. Han elegido un tema tan técnico y complejo como la construcción de un nuevo aeropuerto como su salón de clases. Los métodos de asamblea popular que usan para lidiar con el enredo en el que se metieron con el tema de la terminal aérea tienen muy poco que ver con la necesidad de tomar una decisión informada.

La asamblea popular y la consulta abierta son muy útiles para prevenir reacciones sociales adversas cuando los temas son comprensibles para los participantes, pero este acompañamiento ciudadano que ha decidido el gobierno de transición tiene muy poco que ver con un equipo técnico capacitado para una decisión de estas características. La consulta de la construcción del nuevo aeropuerto no es un triunfo del asambleísmo popular, es un acercamiento a un primer fracaso de gobierno por la poca información disponible. La información de la que se hacen acompañar es, por decir lo menos, engañosa.

El propio presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, promueve un supuesto estudio en el que asegura que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) avala la construcción de dos pistas en la base aérea de Santa Lucía para que conviva con el actual aeropuerto internacional de México y con la terminal aérea de Toluca. Tal estudio simplemente no existe. Es falso, es un engaño, es una mentira. Hay un documento de la OACI en el que menciona de manera circunstancial esa instalación aérea militar y de hecho la descalifica como alternativa.

Algo que no ha informado el gobierno de transición al entusiasta pueblo bueno, que ha tomado Santa Lucía como una bandera ideológica, es que requeriría de expropiaciones de tierra cercana para completar un aeropuerto comercial. Estamos en la antesala de un ejercicio democrático fallido. Porque toda esa ilusión que tienen los grupos de lucha social de inaugurar una nueva era de decisiones del pueblo y

para el pueblo en la cuarta transformación se hará sin conocimiento suficiente y con información falsa.

No se trata sólo de un ejercicio mal llevado, desinformado. Lo peor es que es una consulta manipulada en la que se ha presentado la alternativa de Santa Lucía como la opción del pueblo bueno, contra la opción fifí de Texcoco. Sin pudor, los futuros funcionarios públicos, incluido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, se han dedicado a hacer una campaña abierta a favor de Santa Lucía, en la que hay poca información y un uso intensivo del discurso de lucha de clases.

El informe de la OACI claramente se inclina por Texcoco como la opción técnica más viable para sustituir al actual aeropuerto de la Ciudad de México. Tiene este documento, junto con los otros existentes, elementos suficientes como para tomar la decisión política de mantener la construcción del nuevo aeropuerto en marcha. Pero en este proceso de aprendizaje de pasar de la plaza a la conducción de un país, se tomó la decisión de usar el tema de alta complejidad técnica, de enormes implosiones financieras y hasta de calificaciones crediticias, como materia prima de una consulta popular.

¿Tren Maya, refineras, no exportar petróleo, crear la Secretaría de Seguridad Pública, un museo en Los Pinos, en fin? La discrecionalidad de la elección del tema habla del uso político del mismo. Pero no hay duda de que se tomó un asunto que compete a los expertos, no a los entusiastas del mitin que fueron elegidos para acompañar la consulta. ecampos@eleconomista.com.mx